

CARLOS FUENTES

ESTADOS UNIDOS: NOTAS PARA UN ANÁLISIS *

EL TRASFONDO tradicional de toda contienda política en los Estados Unidos lo constituye la oposición entre el principio federal y el principio del *laissez-faire*. Es decir, la pugna entre la acción reguladora del Estado y la acción libre de la empresa privada.

A través de este conflicto se ha desarrollado la historia de los partidos republicano y demócrata en los Estados Unidos. Y lo notable es que el conflicto entre los Estados Unidos y el mundo subdesarrollado tiende a plantearse en los mismos términos. Sin embargo, al exportar su política, los Estados Unidos sólo presentan una cara: la del principio económico liberal, la que radica toda posibilidad de progreso en las bondades de la libre empresa. En particular, el Partido Republicano es hoy el promotor principal de esta tesis, tanto en lo interno como en lo internacional. Y la forma seductora con que la presenta a los países subdesarrollados es la siguiente: "No intenten fórmulas utópicas e irreales, no experimenten con su desarrollo económico. Sigán ustedes el ejemplo probado de nuestra economía libre y próspera. La grandeza de los Estados Unidos se debe a la libre empresa y a la ausencia de intervencionismo estatal." Esta tesis, sin duda, ha corrido con buena fortuna entre las clases dirigentes de la América Latina y aun, en ciertos casos, se ha convertido en doctrina oficial de nuestros gobiernos. ¡Cuántas veces se ha dado el patético caso de escuchar a funcionarios latinoamericanos repetir estas sabias palabras: ¡El gobierno sólo cumple una función de vigilancia, y crea el clima adecuado para que el país prospere gracias a la iniciativa privada!

Es decir: nos hemos tragado una de las más grandes mentiras de la

* Leído durante los cursos de invierno de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

historia... o le estamos haciendo el juego a una enorme contradicción, según la cual, en principio, propiciamos el libre juego de las fuerzas económicas, y en realidad, utilizamos las tesis del liberalismo para encubrir una muy concreta intervención del Estado... a favor de los intereses minoritarios de los empresarios.

Porque la verdad es que el gigantesco progreso industrial de los Estados Unidos entre la guerra de secesión y la primera Guerra Mundial, no fue producto de la aplicación impoluta de la doctrina de Adam Smith, no supuso un libre juego de fuerzas económicas desarrolladas frente a un Estado marginal. Todo lo contrario: entre 1865 y 1914, el desarrollo industrial de los Estados Unidos se debió a que los empresarios, a través del gobierno del Partido Republicano y la intervención federal de éste, obtuvieron la protección necesaria para llevar a cabo una política económica que, de haberse dejado al azar del *laissez-faire*, hubiese retardado o impedido el desarrollo económico de los Estados Unidos. Los sucesivos gobiernos republicanos de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera década del XX aplicaron consistentemente una política proteccionista para el empresario norteamericano; practicaron sin desvíos una política que, lejos de conformarse al *laissez-faire* liberal, se ciñó a los moldes de una poderosa intervención del Estado a favor de la creciente clase burguesa del país y a favor de la expansión nacionalista de la economía. Se da así el caso de que, mientras los empresarios proclamaban su adhesión inmovible al *laissez-faire*, el gobierno que los representaba establecía aranceles federales para impedir la libre importación y la competencia de las economías europeas; creaba un mercado controlado y protegido por el Estado federal para que el empresario vendiera en él sus productos; entregaba tierras nacionales a los empresarios y les proporcionaba créditos abundantes y baratos. ¡Ah, pero proclamarse liberal era de todas maneras importantísimo para los nuevos empresarios! Si la doctrina liberal era letra muerta en cuanto no les convenía, resucitaba esplendorosa en cuanto se trataba de impedir la acción social de los trabajadores. ¡Ay del trabajador que intentara organizarse para exigir salarios mejores! Sobre él caía todo el peso de la doctrina económica consagrada. En efecto: ¿cómo iba a mantenerse el ritmo de desarrollo capitalista sin mano de obra barata? Históricamente el Partido Republicano creció y se mantuvo en el poder con un doble juego: invocó la protección federal para el desarrollo industrial; invocó el principio del *laissez-faire* en sus relaciones con los trabajadores.

Me parece fundamental para nosotros, los latinoamericanos, comprender

la mecánica de ese doble juego, porque aparentemente las burguesías de Hispanoamérica lo han aprendido. Sólo que no es lo mismo aplicarlo en una nación que desde los primeros años de su independencia pudo desarrollar una economía autónoma, atenta solamente a sus intereses nacionales, que aplicarlo en países de economías supeditadas al extranjero, internacionalmente enajenadas, coloniales.

Se trata, ahora, de comprender el camino histórico de los partidos republicano y demócrata, a través del conflicto secular entre el principio federal y la doctrina económica del liberalismo. Comprender esta trayectoria es de fundamental importancia, porque en un contexto mucho más vasto, constituye un episodio del conflicto mundial entre capitalismo y socialismo, entre la posición que niega la capacidad del hombre para organizar superiormente la vida económica, y la que la afirma.

En el mundo capitalista, los Estados Unidos se distinguen radicalmente por dos hechos:

1) El capitalismo norteamericano se fundó en el vacío social. Los colonizadores eran capitalistas que no encontraban resistencia alguna a sus proyectos de riqueza, que pudieron entregarse sin cortapisas a la producción, que no debieron luchar contra supervivencias feudales. Los colonizadores de la América del Norte se encontraron con el milagro de que su filosofía económica y política coincidía con la exigencia progresista de la vida histórica en el siglo xvii, y coincidía también con el encuentro de un mundo nuevo que no oponía más obstáculo que el del trabajo y la organización, al desarrollo en vivo de esas ideas económicas y políticas. Si en la América Española, por una parte, los colonizadores se encontraron en muchos casos con sociedades preestablecidas que polarizaban las fuerzas de la integración, y que por consiguiente debían dominarse mediante un proceso de sometimiento y destrucción culturales, los colonizadores de la América del Norte se encontraron, de hecho, con tierras vírgenes. Si en la América Española los colonizadores implantaron las formas de una sociedad feudal superada, en la América Anglosajona implantaron las de una sociedad naciente a la que, en ese momento, acompañaba la razón histórica. Si la explotación económica de la América Española se convirtió en una transferencia unilateral de la riqueza de los países explotados hacia la Metrópoli, la explotación económica en la América del Norte se convirtió en una expansión hacia adentro, que más que exportar riquezas, debía crearlas.

2) Los Estados Unidos son el único país capitalista que filosófica, moral,

política y económicamente se fundó, con exclusividad, en el pensamiento liberal y protestante de los siglos xvi a xviii. Si Inglaterra, notablemente, hizo suyas las ideas del protestantismo y del liberalismo, también es cierto que las islas británicas fueron católicas; que en sus universidades, durante siglos, el aristotelismo y el tomismo fueron el alimento filosófico; y que formaron parte de la *Civitas* medieval, de su concepción orgánica de la vida y de su organización feudal de la sociedad. Nada de esto en los Estados Unidos. Desde su nacimiento, la América del Norte es protestante —calvinista y puritana— y recibe su bautizo en la filosofía individualista de John Locke y en la economía espontánea de Adam Smith.

Es protestante: da el espaldarazo al lucro. El protestantismo es el arma religiosa del capitalismo. Los países que deseaban liquidar el orden feudal y la primacía del papado para constituirse en naciones mercantiles independientes, requerían una religión que sancionase el fomento de la riqueza particular y olvidara toda ilusión franciscana, incompatible con la consagración del lucro como máximo bien de la nueva sociedad. El bien es la riqueza y cuanto aumenta la riqueza es bueno. Explotación, especulación, agío: estos son males menores y tolerables, si en efecto crean riqueza.

Es calvinista: quien por sus buenas obras se salva, se salva individualmente, aislado del pecado común del mundo. Y se salva enriqueciéndose: la riqueza personal es el signo de la predestinación al bien.

Es puritano: concibe al mundo como una división permanente e insuperable entre las fuerzas del bien y las del mal. El puritano, desde luego, es el hombre predestinado al bien, el elegido de Dios, el encargado por Dios para librar la batalla contra el mal irredimible. ¿Quién designa al mal? El propio puritano, dotado por Dios de un conocimiento, de una *gnosis* particular que le capacita para definir la frontera entre los buenos y los malos.

Es hija de la filosofía de John Locke: del extremo subjetivismo. Si la tradición de la filosofía social, orgánica, se origina en Aristóteles y en su hombre esencialmente, naturalmente social, Locke es la negación vertical de esa tradición. La realidad, para Locke, no tiene más valor que el de la percepción individual de la misma. Fuera de la percepción individual, el mundo carece de realidad. El sujeto es una sustancia mental atomizada e independiente, cuya percepción define al mundo: ¿Cómo puede haber, así, una relación verdadera entre el sujeto y la sociedad? Más aún: ¿cómo puede haber leyes históricas o sociales independientes, objetivas, si el mundo sólo existe gracias a mí, a mis ojos, a mi tacto? Si nada existe con independencia de la opinión privada de los individuos

—prosigue el razonamiento de John Locke— la ley es sólo una convención que deriva su autoridad del libre consentimiento de una mayoría de individuos. En su *Ensayo sobre el Gobierno Civil*, se pregunta Locke: “Si el hombre en estado de naturaleza es absolutamente libre, dueño absoluto de su persona y de sus posesiones. . . ¿por qué habría de desprenderse de su libertad y sujetarse al dominio de otro poder?” Locke se responde a sí mismo con palabras que se encuentran en la base misma de la vida norteamericana y de las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina: “El propósito principal de los hombres al unirse en sociedad, es preservar su propiedad”. Démonos bien cuenta: la sociedad y el Estado no tienen por fin expresar, mediante una relación orgánica, la plena naturaleza cultural, política o moral de los hombres: *su único propósito es preservar la propiedad privada*. El hombre es libre en la naturaleza, y si accede a limitar su libertad en el Estado, es porque en el estado natural es difícil proteger adecuadamente la propiedad. El hombre crea al Estado, no para desenajenarse de la naturaleza y construir una sociedad humana, sino para abandonar la plena desenajenación de la naturaleza y enajenarse a la propiedad privada.

Pero es claro que si el hombre, para proteger su propiedad, se desprende de parte de su libertad y se somete a la convención de la ley, ésta no puede tocar la propiedad del individuo, porque ello implicaría una contradicción total en los términos. El hombre entra a regañadientes en la sociedad: el Estado es un mal necesario cuya única justificación estriba en la preservación de la propiedad privada.

Esta es la filosofía fundadora de los Estados Unidos. Por una parte, el subjetivismo total con su necesario corolario: la vida individual priva sobre la vida colectiva; aquélla es la única realidad concreta, ésta un mero espejismo. El bien de la colectividad lo define el bien individual. Por otra parte, la idea de la protección de la propiedad privada como única justificación del gobierno. ¿Hemos de sorprendernos de que el gobierno norteamericano haya juzgado la reforma agraria mexicana ayer, y la cubana hoy, como actos violatorios de los derechos del hombre, actos de latrocinio consumado, y negaciones del derecho internacional, del natural y del divino? ¿Hemos de sorprendernos de la incapacidad norteamericana para comprender toda teoría orgánica de las relaciones sociales? La doctrina fundadora de los Estados Unidos no se sometió al embate crítico de Kant, Hegel y Marx.

Es hija, por fin, de la economía espontánea de Adam Smith. La doctrina económica propuesta en *La riqueza de las naciones* corona, en cierto

modo, el conjunto de creencias adoptado por los Estados Unidos a través de la filosofía de Locke y de la teología protestante. Smith concibió al mundo como un vasto taller creado por la división del trabajo y regido por el deseo natural de riqueza y felicidad, común a todos los hombres. Como nadie atenta contra su propia riqueza y felicidad, es preciso dejar en absoluta libertad a las fuerzas de producción. Las relaciones económicas son espontáneas y benéficas: basta liberar de trabas a los factores de la producción para que de hecho se establezca un orden económico espontáneo y benéfico para todos. El Estado —concluye Smith— es incapaz de cumplir funciones económicas.

¿Cómo se tradujeron estas certezas en la vida constitucional de los Estados Unidos? Se tradujeron en la oposición entre el principio federal, instancia de unión necesaria para trece colonias débilmente relacionadas en el momento de la independencia, y los derechos de los estados de la Unión. En la lucha entre el defensor de los derechos de los estados —Jefferson— y los federalistas —Hamilton y Jay— el primero obtuvo la victoria. Los derechos de los estados constituyeron la regla, y la intervención del gobierno federal la excepción. Pero la razón histórica de este debate es mucho más honda. En realidad, se trataba de la defensa del principio lockiano: fuera de la protección de la propiedad privada, el gobierno no tiene funciones. “Mientras menos gobierno, mejor”, diría más tarde Ralph Waldo Emerson. Al limitar al máximo el principio federal, los constituyentes norteamericanos buscaban, a través de los derechos de los estados, librarse de toda instancia intervencionista y llevar a cabo el desarrollo económico de los Estados Unidos en propio beneficio. No fue sino hasta 1908 cuando Charles Beard, en su *Interpretación económica de la Constitución*, reveló los verdaderos motivos económicos de la sacrosanta Carta Magna norteamericana. Beard empezó por afirmar que la idea de Nación es puramente abstracta, y que sólo los grupos económicos que luchan dentro de una sociedad definen la naturaleza de ésta. La Constitución norteamericana, para Beard, fue “esencialmente un documento económico fundado en el concepto de que los derechos fundamentales de la propiedad son anteriores al gobierno y trascienden moralmente cualquier decisión popular que pudiese afectarlos”, y la principal preocupación de los constituyentes fue la de “salvaguardar los derechos de la propiedad privada contra cualquier tendencia niveladora de parte de las masas desheredadas”. La Constitución se limita a traducir los motivos económicos de la clase terrateniente que la redactó y aprobó. Su objeto consiste en proteger los intereses de las clases superiores contra la vigilancia democrática. Por este

motivo, la Constitución otorgó semejantes poderes a la organización judicial, cuyos miembros no son elegidos ni vigilados por el pueblo.

La oposición de partidos en los Estados Unidos abarca tres etapas: Federalistas contra Republicanos (1789-1816); Republicanos Nacionales contra Demócratas (1830-1856) y Republicanos contra Demócratas (a partir de 1856). En 1856, el Partido Republicano era el defensor del principio federal, y el Demócrata el del *laissez-faire*. Los intereses primordiales del Partido Demócrata se encontraban en el sur de los Estados Unidos. A la clase terrateniente sureña le interesaba que el gobierno federal se abstuviese de meter las manos en un régimen de producción esclavista y agrícola. Por otra parte, los propietarios individuales y los pequeños productores del Norte preferían también el abstencionismo estatal, de acuerdo con la ideología fundadora y de acuerdo, también, con sus intereses económicos incipientes. No obstante, durante la segunda mitad del siglo XIX, y sobre todo a partir de la guerra civil, la revolución tecnológica introdujo cambios fundamentales en la producción. Era difícil que el pequeño productor independiente soportase, aislado, la transformación acarreada por los adelantos de la electrodinámica, la termodinámica, la física y la química. El resultado fue que los productores independientes se unieran para formar grandes corporaciones.

La doctrina de Locke, al nacer las grandes corporaciones y los monopolios, era puesta a prueba. Locke sólo había previsto la propiedad privada del individuo. Pero ¿quién era el propietario de una suma de propiedades privadas? ¿Quién era el propietario de los bienes vastos y disímiles de una corporación? ¿Quién era el propietario de grandes empresas corporativas que ya no cumplían una función privada, sino pública y colectiva? Nuevamente, los empresarios utilizaron a su favor la doctrina de Locke. La propiedad de estas empresas debía corresponder a un grupo limitado de capitalistas, y no al Estado.

No obstante, como ya se ha visto, los empresarios acudieron al principio federal a efecto de vender sus productos en un mercado cerrado, federalmente protegido y controlado, pero continuaron adquiriendo sus materias primas y su mano de obra en un mercado mundial competitivo y de *laissez-faire*. Este es el momento en que las economías latinoamericanas empiezan a girar en la órbita de la norteamericana. El crecimiento industrial de los Estados Unidos determina que nuestra producción se dedique a abastecerlo de materias primas. Se inicia el auge azucarero de Cuba y el henequenero de Yucatán.

El capitalismo norteamericano crecía a sus anchas, protegido por los

aranceles de la libre competencia en el mercado internacional, y protegido por el principio de la propiedad privada en el mercado interno: la propiedad se había concentrado en pocas manos. Los perjudicados fueron los agricultores norteamericanos, obligados a adquirir artículos elaborados en un mercado nacional cerrado, definido por un alto arancel federal, y a vender sus productos agrícolas en el mercado libre internacional. Los perjudicados fueron también los obreros, dejados a su suerte en la relación frente al patrono, ya que en este renglón imperaba la política del *laissez-faire*.

A fines del siglo XIX, los agricultores y los obreros decidieron utilizar a su favor el principio federal. Es decir, iniciaron una lucha para que el gobierno federal interviniese en los campos del trabajo y la producción agrícola y apoyase las pretensiones de sindicalización, subsidios y limitación de los monopolios exigidas por obreros y agricultores. Estas clases comenzaron a gravitar hacia el Partido Demócrata, que de esta manera se convirtió en el partido del principio federal, en tanto que el Partido Republicano lo abandonaba. ¿Por qué? Porque la expansión de la economía norteamericana había dejado atrás la necesidad del proteccionismo y comenzaba a sobreproducir. En consecuencia, el arancel proteccionista dejaba de ser un beneficio, dado que impedía el cambio del excedente norteamericano por bienes extranjeros. El Partido Republicano abandonó el principio federal, se convirtió en el partido del *laissez-faire* y condujo la política postbélica de inflación que culminó con el derrumbe del mercado de valores en 1929 y los años de depresión. Durante la postguerra, la filosofía del *laissez-faire* impidió al gobierno actuar nacionalmente a efecto de estabilizar precios, regular el mercado de trabajo a la expansión del mercado de valores.

Una buena mañana, los Estados Unidos despertaron con la nueva de que la vieja filosofía de Locke y Adam Smith había dejado de funcionar. Es el momento en que el Partido Demócrata reivindica con mayor energía la bandera del principio federal y lleva al gobierno a Franklin Roosevelt.

A casi treinta años de distancia, es posible hacer un balance aproximado del "Nuevo Trato" de Roosevelt. Por primera vez en su historia, los Estados Unidos se vieron obligados a admitir que las funciones del Estado no eran intrínsecamente perversas. Durante los años de la postguerra, el libre juego de las fuerzas económicas y el abstencionismo total del Estado habían conducido a una depresión que en pocos meses desempleó a la cuarta parte de la fuerza de trabajo, borró los ahorros de miles de familias, y aplastó a centenares de pequeñas industrias y empresas agrícolas. El pro-

pósito de Roosevelt, sin embargo, nunca fue el de socializar a la economía norteamericana. “El Nuevo Trato —explicó el Presidente— es una reforma que tiende a preservar el sistema de la libre empresa, garantizando las condiciones en las que ésta pueda trabajar.” La tesis de Roosevelt era que el imperio absoluto del *laissez-faire* conducía a la inestabilidad y a la depresión crónica. De allí la necesidad de limitarlo mediante la acción gubernamental a efecto de obtener un clima general de equilibrio, y de someter la iniciativa privada al interés público. El gobierno de Roosevelt, invocando el principio federal, extendió la autoridad federal a zonas inéditas de la economía y la sociedad. Durante su primer período de gobierno (1932-1936), se creó la Autoridad del Valle de Tennessee, se inauguraron vastos programas de obras públicas, se tomaron medidas intervencionistas directas para resolver el problema del desempleo, para estabilizar la producción, mantener salarios altos, subsidiar al agricultor, extender créditos gubernamentales y vigilar el mercado de valores. Paralela a esta acción directa del gobierno federal, las organizaciones sindicales cobraron el mayor auge de la historia norteamericana. La Federación Americana del Trabajo (AFL), entre 1932 y 1935, sindicalizó a millón y medio de trabajadores. El Congreso de Organizaciones Industriales (CIO), encabezado por John L. Lewis, logró por primera vez la sindicalización general de los obreros de las grandes industrias metalúrgicas, automotrices, textiles, del aluminio y del caucho. Bastó un período presidencial fundado en el intervencionismo estatal para que la economía norteamericana recuperara, y aun superara, su ritmo de desarrollo. Al mismo tiempo, el fracaso del Partido Republicano y de su filosofía, provocó una reacción intelectual que puso en tela de juicio las ideas fundadoras —Locke, Smith, el pragmatismo protestante—. Son los años en que se estudia a Marx en las universidades, proliferan las revistas de izquierda, y la literatura norteamericana olvida su optimismo nativo y presenta un rostro vibrante de indignación y fraternidad: Dos Passos, Steinbeck, Farrel. Pero entre tanto, las corporaciones también utilizan a su favor las medidas de progreso y estabilidad del “Nuevo Trato”. La depresión facilitó la concentración monopolista, al destruir a multitud de pequeñas empresas que fueron absorbidas por las grandes corporaciones. El resultado fue que, en 1937, a los cinco años del “Nuevo Trato”, una sola compañía dominaba el 99% de la producción del aluminio; tres compañías producían el 80% de los automóviles; y tres compañías el 60% del acero. Hacia 1937, la Suprema Corte —fiel a la tesis de Beard— había derogado la mayor parte de la legislación intervencionista y protectora del “Nuevo Trato”. Los elementos conservadores

del Partido Demócrata habían acusado a Roosevelt de intentar la creación de un partido socialista. Las necesidades electorales (en 1940, Roosevelt debía postularse para una tercera elección) acabaron por someter a Roosevelt a la política de cautela de su partido. Bien pronto, el debate interno murió, y se trasladó al campo internacional. El arraigado aislacionismo norteamericano había impedido que las repetidas voces de alarma de Roosevelt preparasen al pueblo de los Estados Unidos contra la agresión fascista. El ex Presidente Hoover había declarado: "Vivir en un mundo dominado por los fascistas no sería agradable, pero sería posible." Sólo la derrota de Francia y, por fin, el ataque a Pearl Harbor, despertaron a la conciencia norteamericana.

La economía de guerra superó definitivamente los lastres de la depresión y creó toda una nueva clase de empresarios enriquecidos. Los Estados Unidos emergían victoriosos de la contienda, con una economía en expansión y un propósito nacional claro: continuar el desarrollo económico por las vías liberales, pero aprovechar las enseñanzas del "Nuevo Trato" para impedir nuevas depresiones. Emergían, también, del aislacionismo y asumían un papel directivo en las relaciones internacionales.

La guerra no sólo se había librado para derrotar al Eje. La victoria de las Naciones Unidas las comprometía, sobre todo, a dar cumplimiento a los propósitos de mejoramiento económico de los países subdesarrollados, anunciados en la Carta del Atlántico. Pero se cruzó la Guerra Fría. Los herederos de Roosevelt, lejos de fomentar su política, la traicionaron. Pensar que los Estados Unidos pudieron proseguir, en escala mundial, la política que el "Nuevo Trato" observó hacia el régimen de Cárdenas, pertenece al reino de los buenos deseos. Como a buen deseo se reduce pensar que los Estados Unidos pudieron aprovechar sus inmensos recursos para elevar realmente el nivel de vida de los pueblos menos desarrollados, para construir una paz sobre bases de leal cooperación económica, respeto a la autodeterminación de los países subdesarrollados y limitación de los intereses de los grupos capitalistas norteamericanos.

La actitud del "Nuevo Trato" fue sustituida por una actitud negativa e hipnótica: al anticomunismo. Hace poco, el líder laborista inglés Aneurin Bevan afirmaba que, hoy, el mundo no puede recibir inspiración, ni política ni económica ni intelectual, de los Estados Unidos. El único propósito de éstos es combatir al comunismo, mantener a los gobiernos conservadores en todo el mundo y pegarles la etiqueta roja a todo movimiento reivindicador nacional. Lo cierto es que ninguna política positiva puede sostenerse sobre un mero "anti". Acaso el desarrollo de las ideas del "Nuevo

Trato” hubiese significado algo para los pueblos de África, Asia y América Latina. Pero el escueto anticomunismo no poseía, ni posee, significado concreto alguno para esos pueblos.

¿Con qué fue colmado el vacío intelectual creado por Truman? Con un regreso a la filosofía tradicional del protestantismo, el individualismo lockiano y el *laissez-faire* económico. Pero esta filosofía ya había cumplido su función natural dentro de los Estados Unidos. ¿Qué función internacional podría cumplir? ¿Era capaz de resolver los problemas sociales y económicos, totalmente novedosos, del siglo xx? No: sólo era capaz de defender internacionalmente al capitalismo interno de los Estados Unidos. Y de defenderlo sólo por un espacio limitado de tiempo: la política cegata de Truman y Dulles jamás pudo prever que las líneas de fuerza histórica pugnaban en sentido opuesto. La política del “Nuevo Trato” fue sustituida por la política resurrecta del liberalismo económico y el puritanismo moral. El espíritu protestante, al ser exportado, se convirtió en el maniqueísmo de Dulles: la tajante opción de nuestro tiempo se ciñe a escoger entre el bien encarnado y absoluto —el capitalismo occidental— y el mal demoníaco y total —el comunismo—. La perseverancia de esta actitud maniquea la demostró hace algunos meses el general C. P. Cabell, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, al declarar ante un subcomité del Senado que Fidel Castro no es un comunista. Añadía el general Cabell que el Primer Ministro cubano ni siquiera es procomunista: lo que sucede es que no es anticomunista. No se juzga a un hombre o a un país de acuerdo con sus afirmaciones positivas. Para merecer la aprobación de los Estados Unidos es preciso ser anti: la negación es la medida del valor. La filosofía lockiana, al ser exportada, se convirtió en presión diplomática para la protección de la propiedad privada de ciudadanos norteamericanos, por encima del interés colectivo del país en que aquéllos invirtiesen: el gobierno sólo se justifica en la medida en que protege la propiedad individual. No importa que Guatemala trate de alcanzar la prosperidad colectiva a través de la reforma agraria: lo importante —lo justo, lo natural y lo divino— es proteger la propiedad del monopolio frutero. El *laissez-faire* económico, al ser exportado, se convirtió en un dominio más acentuado de las economías subdesarrolladas: lejos de suponer una competencia entre partes iguales, el *laissez-faire*, aplicado a las naciones subdesarrolladas, supone la libre expansión imperialista de la empresa privada norteamericana. ¿Qué sentido puede tener el libre juego de la acción económica individual para el campesino bananero de Ecuador o para el trabajador del estaño en Bolivia? ¿Qué sentido

puede tener la protección de la propiedad privada para las tres cuartas partes de la humanidad que sólo perciben una cuarta parte del ingreso mundial?

La política exterior norteamericana, de 1946 a 1960, no ha podido ofrecer nada a los países subdesarrollados. Pero ha significado el respaldo a todos los gobiernos conservadores y tiránicos. La nómina de este respaldo resulta impresionante; Franco, Salazar, Chiang Kai Check, Syngman Rhee, Bao Dai, Batista, Pérez Jiménez, Trujillo, Rojas Pinilla, Somoza, Menderes, Castillo Armas, Ydígoras, Sanaikone, Stroessner. Es apenas natural que quienes han respaldado a estos paradigmas del "mundo libre", condenen a Fidel Castro y al régimen revolucionario de Cuba. Es apenas natural que el guajiro cubano, el estudiante coreano, el intelectual turco, el obrero español, identifiquen al gobierno de los Estados Unidos con todo aquello de lo que se desean librar; la oligarquía feudal, el latifundismo, la deformación colonialista de la política y la economía, el ejército de casta.

Hemos visto cómo el capitalismo norteamericano, en primer término, se fundó en el vacío social y pudo desarrollarse sin remanentes históricos que lo entorpecieran. Cómo, en seguida, aprovechó el principio federal para desarrollarse mediante el proteccionismo estatal: es la etapa del desarrollo de una multitud de empresas más o menos pequeños e individualmente controladas. Cómo, después, la revolución tecnológica suprimió a las empresas individuales, obligándolas a desaparecer o a fundirse en grandes corporaciones capaces de soportar el peso de las transformaciones técnicas. Cómo, durante la depresión, se acentuó el fenómeno de la concentración y centralización de la economía, tanto en el sector privado como en el público. Por fin, durante la segunda guerra, el gobierno, a efecto de mantener la altísima producción bélica, se vio obligado a acudir a las grandes corporaciones. Entre 1940 y 1944, el gobierno hubo de extender a las corporaciones contratos para la explotación de las materias primas norteamericanas por valor de 175 mil millones de dólares. Es decir: tuvo que entregarles el dominio de los medios de producción norteamericanos. Las dos terceras partes de esos contratos fueron otorgados a 200 compañías. Si en 1939 las principales corporaciones norteamericanas dominaban el 65% de los medios de producción, durante la guerra llegaron a dominar el 79% del nuevo equipo de producción creado para la defensa y pagado por el Estado. La guerra significó un incremento de 26 mil millones de dólares en equipos y plantas industriales. Si se considera que, hasta 1939, el valor de la planta industrial de los Estados Unidos era de 40 mil millones de dólares, resulta que durante la contienda aumentó en más de la mitad,

y que más de las dos terceras partes de ese incremento quedó en manos de las grandes corporaciones.

Es claro que una planta industrial de estas dimensiones engendra, necesariamente, una clase directiva centralista. Cuando las tres cuartas partes de la capacidad de producción están en manos de las corporaciones, son éstas las que gobiernan. Y lo cierto es que gobiernan con gran disimulo. Nunca se sabe que ellos definan la política norteamericana, porque todos los canales de la expresión democrática permanecen abiertos. Sin embargo—cada vez más— esa expresión no surge desde abajo: es condicionada desde arriba. El caso de la prensa es típico. Hasta 1939, era común que incluso los periódicos más pequeños se mantuviesen independientes; es decir, que cubrieran autónomamente sus fuentes de información. En la actualidad, salvo casos aislados, lo común es que la prensa de las diversas localidades haya sucumbido ante la fuerza de las grandes agencias noticiosas centralizadas —AP y UPI— y se limiten a repetir las versiones condicionadas desde arriba. “Las familias, las iglesias y las escuelas deben adaptarse a la vida moderna —escribe C. Wright Mills— pero el gobierno, el ejército y las corporaciones la definen.” Lo mismo puede decirse, en sustancia, del sistema bipartidista, financiado y orientado por una misma “élite del poder”. Sin ir más lejos, y sin rebasar nuestro problema latinoamericano, ¿en qué se distinguen las declaraciones sobre la Revolución cubana formuladas el 30 de mayo a la revista *U. S. News and World Report* por Nixon y Kennedy? El primero, republicano, dice: “Ojalá que... el propio pueblo cubano cambie la actual dirección del gobierno castrista, a fin de recuperar las metas de la revolución original y de las cuales, particularmente la libertad, Cuba se ha desviado tan lamentablemente”. El segundo, demócrata, pronostica, “. . . la situación cubana sigue deteriorándose. . . La situación puede cambiar en cualquier momento. Quizá algún día surja otro Castro en las montañas que sea un demócrata convencido; el año entrante puede traer muchas sorpresas. . .”

El dominio de los medios de producción por las grandes corporaciones define el actual centralismo político, económico o informativo norteamericano. Es evidente que ese dominio no se puede dejar al azar de la espontaneidad de Adam Smith, sino que requiere una intervención política constante. Y uno de los factores de esa intervención consiste en asegurar el flujo permanente de materias primas baratas, producidas por mano de obra barata, desde los países subdesarrollados, y en mantener gobiernos “amigos” —es decir, conservadores— en esos países. Sólo que, al traducirse en política exterior, el centralismo de las grandes corporaciones pro-

pone las tesis que él mismo ha dejado de practicar: *laissez-faire*, manos fuera de la producción, manos libres para los inversionistas norteamericanos, manos libres para los exportadores norteamericanos de materias primas. Las reformas agrarias, las nacionalizaciones de recursos básicos y las medidas proteccionistas ahuyentan al capital norteamericano de los países subdesarrollados, y en consecuencia retardan el progreso de éstos. Sostener semejante falacia es fundamental para los grupos corporativos norteamericanos: sin la dominación colonialista de los países pre-industriales, no podrían conjugarse las altas utilidades de las corporaciones y el alto nivel de vida del pueblo norteamericano. Sin la mano de obra y las materias primas baratas de América Latina, África y Asia, los Estados Unidos deberían sacrificar uno de dos: las utilidades de las corporaciones, o el nivel de vida del pueblo norteamericano.

Esta tesis, característica de comerciantes que no ven más allá del balance anual, peca por ciega e injusta. No obstante, así se plantean las cosas. Los Estados Unidos pueden gastar 50 mil millones de dólares al año en armamentos. Pero si un pueblo latinoamericano pone en entredicho la inversión norteamericana, se expone a desaparecer del mapa. El total de la inversión norteamericana en Cuba es de 900 millones de dólares: el precio de unos cuantos bombarderos. Sin embargo, Cuba no tiene derecho a limitar mínimamente el factor inversionista para crear, a través de la reforma agraria, la prosperidad general del pueblo.

Esta ceguera ha impedido a los Estados Unidos observar el desarrollo de otros factores, que poco a poco han ido creando una situación mundial totalmente adversa a los viejos esquemas de la explotación colonial. Estos factores, limitativamente enunciados, son:

1) La imposibilidad de resolver los problemas actuales del mundo con la "guerra caliente", dada la seguridad de que en ella no habría ni vencedores ni vencidos, sino la destrucción total del género humano.

2) La imposibilidad de mantener la guerra fría y con ella la carrera de armamentos, sin propiciar la insurrección universal de los países subdesarrollados, cuyas posibilidades de desarrollo político, económico y social son aplazadas por la guerra fría, en la cual estos países juegan el papel de peones.

3) La prueba, proporcionada por la Unión Soviética y China, de que un país atrasado puede industrializarse rápida y efectivamente sin ayuda exterior o inversión de capitales extranjeros.

4) La decisión de los países subdesarrollados de llevar a cabo una polí-

tica económica de beneficio colectivo, liberándose de la deformación colonial, fundando su desarrollo económico en la utilización abundante y racional de los recursos propios, y suprimiendo a las castas explotadoras que han concentrado los altos ingresos de esos países y han despilfarrado el excedente económico de los mismos.

La suma de estos factores ha propiciado la actual etapa de deshielo. Se trata, como se ve, de factores objetivos que difícilmente pueden juzgarse a la luz de actitudes personalistas de los jefes de Estado. Las recientes escaramuzas de éstos, lejos de poner en entredicho esos factores, han servido para impresionar a la opinión mundial con la necesidad de aceptar, en toda su extensión, la política de la coexistencia pacífica.

Los Estados Unidos atraviesan una crisis que el propio Eisenhower ha definido como "crisis de propósitos". Con el más alto ingreso *per capita* de su historia, con problemas internos poco visibles para el norteamericano medio, el pueblo de los Estados Unidos ha agradecido la administración incolora, carente de imaginación, estática, del Presidente Eisenhower. El "Nuevo Trato", la segunda Guerra Mundial, la cruzada anticomunista, la guerra de Corea y el macartismo parecen haber agotado la dinámica norteamericana. Los años del aquelarre de brujas macartistas uniformizaron los criterios de ambos partidos y amedrentaron a las voces liberales norteamericanas. La concentración de la riqueza y el poder político en la élite corporativa acentuaron esa uniformidad de criterio y limitaron ese margen de inconformismo. Hoy por hoy, el conformismo y la pasividad caracterizan a la gran masa norteamericana.

Sólo un hecho ha sido capaz de sacudirla recientemente: los triunfos científicos soviéticos, y su corolario: no sólo el régimen de "libre empresa" es capaz de producir en abundancia productos de calidad; el mundo capitalista ya no se encuentra a la cabeza del progreso técnico. Capitalismo y tecnología han dejado de ser sinónimos. Añádase a éstos la voz premonitoria del jefe de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, Allen Dulles, quien hace algunos meses informó que el índice anual de crecimiento económico soviético casi duplica al norteamericano.

Los dogmas han entrado en crisis.

Los Estados Unidos dejan de sentirse la nación predestinada de la historia.

Los Estados Unidos se enteran de que el mundo de los "malos" también es capaz de producir lo mejor del mundo de los "buenos": la riqueza.

Los Estados Unidos se enteran de que la mitad del mundo no piensa que

el propósito del gobierno sea la protección de la propiedad privada, y a pesar de ello se desarrolla a pasos agigantados.

Los Estados Unidos se enteran de que la planificación alcanza las metas de bienestar y abundancia más rápidamente que la teoría espontánea de Adam Smith.

Y se enteran, por fin, de que los países subdesarrollados se están enterando de lo mismo.

Los dogmas han entrado en crisis.

Aunque es cierto que es el mundo externo a los Estados Unidos el que le plantea un reto decisivo, no lo es menos que, en el orden interno, la muralla de la "élite del poder" presenta hondas fisuras. El incidente del U-2 ha puesto de relieve las discrepancias entre los elementos moderados del poder civil y el marcialismo desbocado del Pentágono. La reciente huelga del acero fue, esencialmente, un resultado de la creciente automatización de la industria. La siderurgia norteamericana produce en la actualidad 30% más de acero que en 1953, pero emplea a 44 mil obreros menos. Pese a la política de subsidios, el ingreso del agricultor norteamericano ha descendido, desde 1951, en un 21%. Esto se debe, parcialmente, a la sobreproducción anárquica y parcialmente a la casta creciente de intermediarios en la venta. Hay aquí otro foco de descontento, al que el actual régimen no ha sabido ofrecer soluciones. El progreso de la integración racial, decidida por la Suprema Corte, es muy lento. Los derechos cívicos de la población negra son violados permanentemente. El negro norteamericano, en general, considera que en la actualidad es más peligroso que nunca inscribirse en las listas electorales. En ocho estados de la Unión el número de negros inscritos en las listas electorales ha descendido en un 5% entre 1956 y 1958, y en varios estados del sur, donde más del 50% de la población es negra, no hay un solo negro inscrito en las listas. La razón es clara: temor a represalia económicas o personales, que van del despido al linchamiento.

Pero el problema en el que se anudan las dificultades externas o internas de los Estados Unidos, es el del desarme. El deshielo plantea la necesidad de transformar la economía de guerra en una economía de paz y sus posibles consecuencias: desempleo, cierre de fábricas y depresión económica. Al respecto, es interesante notar que aun en los grupos dirigentes de la economía norteamericana surge una división creciente. El gasto bélico anual de los Estados Unidos —50 mil millones de dólares— representa el 10% del producto nacional bruto. El *lobby* armamentista opina que el desarme, en consecuencia, significaría el desplome de la economía norteamericana. Otros sectores de esa economía no piensan así. Un periódico que no es pre-

cisamente una hoja comunista, el *Wall Street Journal*, afirmaba hace poco: "El relajamiento de la tensión internacional puede acarrear una enorme expansión económica. Aumento del consumo civil superando en mucho la disminución de los gastos militares. . . Una enorme expansión de las inversiones en nuevas plantas y equipos. Ingresos más altos para todos. Menos impuestos. Menos desempleo". No decía otra cosa Nikita Jruschov ante la Asamblea de las Naciones Unidas el año pasado: "La utilización de los recursos liberados por el desarme crearía las más vastas posibilidades de empleo para la población. La tesis según la cual el desarme acarrearía una crisis en los países altamente desarrollados del mundo capitalista, es errónea."

Esta es la disyuntiva. De un lado, la continuación de la guerra fría, el aplazamiento del desarrollo de los países atrasados, la pesadilla de que se desate una guerra caliente. Del otro, el desarme, la conversión de las industrias bélicas a usos pacíficos y su necesario corolario: la importancia de contar con mercados capaces de adquirir la mayor producción industrial liberada por el desarme. ¿Quiénes adquirirán esos productos? ¿Pueblos con un ingreso anual por cabeza de 100 dólares? El desarme, de esta manera, plantea la necesidad de una economía planetaria, racionalmente planificada. En una economía de esas características, los países subdesarrollados serían dueños de sus materias primas, de su producción agrícola tecnificada y de sus empresas extractivas nacionalizadas. Fundarían sobre la explotación racional y abundante de esa producción básica el mejor nivel de vida de su población, y su mayor poder adquisitivo. Y también sobre ella, fundarían su industrialización nacional. ¿Supondría esto la quiebra de las economías de los países desarrollados? De ninguna manera. Como escribe el profesor Paul A. Baran, "el alcanzar un orden social en el cual el crecimiento económico y cultural sea posible de realizar fundándose en un creciente dominio racional del hombre sobre la inagotable fuerza de la naturaleza, es un reto que supera en alcance a todo lo que hasta la fecha se ha logrado en el curso de la historia". Claro está: ese reto supone una auténtica cooperación, una auténtica interdependencia entre los países del mundo. Las comunidades en proceso de desarrollo venderían sus excedentes de materias primas a precios estables, no a un solo comprador, sino a un mercado diversificado. E importarían los productos industriales que por razones naturales no pudiesen producir, pero a precios más bajos que los actuales, dado que la economía de paz multiplicaría y abarataría la producción industrial en todo el mundo. Cada país trataría de satisfacer en la máxima medida las necesidades internas de su población; aún así, el margen del comercio internacional sería inmenso, y se fundaría en un trato

paritario: ninguna nación dependería en exceso de otra, pero todas dependerían unas de otras.

Pero esto, seguramente, nos lleva demasiado lejos. Estamos apenas en el umbral de esta nueva era, y parecen ser más los hechos que la obstaculizan que los que la propician. No obstante, el desarme abre esa puerta, y es preciso mantenerla abierta. La mano que desea cerrarla es la del imperialismo y sus dos procedimientos: el de la explotación directa, cada vez más raro, y el de la explotación indirecta. El método indirecto es hoy el más efectivo, y consiste en establecer en los países semicoloniales gobiernos de apariencia democrática que propongan las soluciones de la "libre empresa" y admitan sin reservas las inversiones norteamericanas en su territorio; que se vean colmados de créditos, que protejan la explotación irracional de las riquezas nacionales por los grupos exportadores y aseguren un flujo continuo de materias primas baratas, producidas por mano de obra barata, a la Metrópoli norteamericana. La misma gata —dice el refrán mexicano—, nomás que revolcada. Lleras Camargo es más útil que Rojas Pinilla.

Sin embargo, la nueva política del dominio indirecto se enfrenta a una creciente conciencia, y a una decisión cada día más firme, de los países sub-industrializados. Asesinado en España el internacionalismo ideal de las primeras décadas del siglo xx, surge hoy un internacionalismo concreto: el de los países subdesarrollados, que se reconocen en una lucha común y en una esperanza común. La respuesta de estos países, en particular los de América Latina, a la falaz "solución" norteamericana, sólo puede consistir en llevar a cabo, en contra de todos los obstáculos, su tarea revolucionaria. Sí, revolucionaria, porque sólo una transformación política que coloque el desarrollo económico en manos de gobiernos verdaderamente democráticos y nacionales, puede destruir los moldes tradicionales de la deformación colonial; inutilizar al ejército como factor político; reformar la tenencia latifundista de la tierra; diversificar soberanamente el comercio exterior; nacionalizar los recursos básicos; fundar la industrialización en la utilización racional y abundante de los recursos propios; dar un destino productivo y popular al excedente económico despilfarrado por las clases dirigentes, los exportadores extranjeros de materias primas y los inversionistas privados, y establecer metas económicas populares planificadas.

Sólo así nos acercaremos a ese "crecimiento económico y cultural" fundado en "un creciente dominio racional del hombre sobre la inagotable fuerza de la naturaleza".

Nuestra tarea no puede depender del resultado de las elecciones norteamericanas. Si triunfa el ala derecha del Partido Republicano, debemos

prepararnos para una dura batalla. Pero acaso una mayor oposición norteamericana sólo sirva para agudizar la necesidad de nuestro desarrollo regional y poner en crisis muchas de las soluciones falsas que actualmente se nos proponen. Una política más rígida o una política más liberal por parte del gobierno norteamericano puede entorpecer o facilitar la revolución democrática en Hispanoamérica. Pero no puede ni debe, en ningún caso, detenerla. Nuestra lucha es idéntica a la de dos mil millones de hombres. Por primera vez, lo que sucede en América Latina no representa un esfuerzo aislado, ni se plantea en términos puramente regionales; se identifica con la lucha, la esperanza y el destino de la mayoría de la humanidad.